



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: DAVID SANTAMARÍA ÁLVAREZ (Sucesor procesal de
JOHN JAIRO SANTAMARÍA PELÁEZ)
Demandado: JUAN CARLOS VÉLEZ MARÍN
Radicado: 05001 31 05 006 2017 00390
Sentencia: S-079

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación presentados por los apoderados de ambas partes en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el día 06 de diciembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

JOHN JAIRO SANTAMARÍA PELÁEZ, en principio, pues luego fue sucedido procesalmente por DAVID SANTAMARÍA ÁLVAREZ, demandó a JUAN CARLOS VÉLEZ MARÍN para que, una vez de declare la

existencia de *“un Contrato de Suministro de Prestación de Servicios Profesionales”* (sic), e igualmente que el contratante (el demandado) incumplió totalmente dicho contrato, sea CONDENADO al pago de las siguientes sumas de dinero: a) por las actividades arquitectónicas adelantadas en el proyecto denominado VEGAS DE SAN JUAN, \$1.826'447.746; y b) por el proyecto denominado FONTANAR P.H., la suma de \$463'830.704, debidamente indexados.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones que con su oficina de servicios profesionales, ARCA ARQUITECTURA, fue contratado por el demandado, iniciando en el mes de febrero de 2013 con la ampliación y modificación de un local comercial ubicado en la K. 81 N° 33 AA -2 de la ciudad de Medellín, servicios que se pagaron a satisfacción. Indica que a partir de allí comenzó una labor periódica y continua de suministrar servicios por su parte. Que en ese mismo año - 2013 - inició un proyecto de Parcelación denominado NORMANDÍA, posteriormente FONTANAR, cuya gestión le correspondió a él como contratista que implicó inicialmente un diseño arquitectónico para gestionar la licencia de urbanismo ante la oficina de planeación del municipio de Copacabana, parcelas para vivienda, luego colaboró para integrar otros dos lotes de la familia VÉLEZ MARÍN, con lo cual se demuestra el vínculo como arquitecto proyectista, coordinador de los profesionales del proyecto y gestor de varias actividades para legalizar dicho proyecto. De manera concomitante, realizó otras gestiones en favor del demandado en el suministro de servicios de arquitecto – las cuales describe en el hecho 3º de la demanda – e igualmente en los hechos 4º y 5º detalla las gestiones efectuadas en el proyecto denominado PARCELACIÓN FONTANAR P.H.; en el 6º relaciona pormenorizadamente, como en las anteriores, las gestiones efectuadas en el proyecto denominado VEGAS DE SAN JUAN P.H. Indica que conforme a la prueba sumaria allegada, le correspondió realizar prestaciones periódicas durante 4 años con base en sus conocimientos

profesionales en favor del demandado, comerciante de profesión y con ello sujeto mercantil. Advierte que como contratista debe recibir un precio que, al carecer de un documento que enmarcara las condiciones del contrato, debe aplicarse el art. 980 del Código de Comercio. Señala que los valores de las pretensiones corresponden a los ítems que regula el decreto 2090 de 1989 para el desempeño de los servicios de arquitectura y que respecto al pago por la realización de los proyectos el contratante le planteó pagarle con unidades inmobiliarias de cualquiera de los dos proyectos una vez se desarrollaran, y por situaciones que competen al patrimonio del contratante dichos proyectos, al momento de presentar la demanda, no se habían consolidado y las evasivas para el pago de las obligaciones han llegado al extremo de escondersele o no contestarle al teléfono.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, JUAN CARLOS VÉLEZ MARÍN se opone a las pretensiones tanto declarativas como condenatorias. Respecto a los hechos de la demanda, manifiesta, en general, que entre las partes nunca ha existido un contrato de prestación de suministro y en lugar de ello se dieron tres contratos verbales: uno de confección de obra material y dos de prestación de servicios profesionales de arquitecto. Que mucho menos se ha tratado de relaciones continuas y ha sido por periodos delimitados. Así mismo aclara que ninguno de los tres contratos celebrados por las partes fue incumplido por el no pago, ya que en el de confección de obra material y en el de prestación de servicios profesionales para el proyecto FONTANAR P.H., se le pagó en efectivo y por medio de consignaciones bancarias. En cuanto al proyecto VEGAS DE SAN JUAN P.H., se pactó que el pago por los servicios profesionales sería con un apartamento de ese mismo proyecto, siempre y cuando éste resultara viable y se pudiera construir, de lo que se concluye que no existió incumplimiento y no hay lugar al pago de dinero por ningún concepto, y menos a la indexación de las cifras pedidas. Como excepciones propuso la de temeridad e inexistencia de la obligación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 06 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

***“Primero.** Se condena al señor Juan Carlos Vélez Marín a pagar a David Santamaría Álvarez, como sucesor procesal del señor Jhon Jairo Santamaría Peláez, la suma de veintitrés millones novecientos noventa mil pesos (\$23.990.000) indexados anualmente hasta la fecha de pago.*

***Segundo.** Se absuelve al señor Juan Carlos Vélez Marín, de las demás pretensiones de la demanda.*

***Tercero.** Las excepciones propuestas contra la demanda quedan resueltas implícitamente con las consideraciones para este proveído.*

***Cuarto.** No hay condena en costas.*

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconformes con la decisión, presentaron recurso de apelación los apoderados de las partes.

El DEMANDANTE, (i) frente al análisis probatorio que se hizo en la sentencia de primera instancia. Para negar la mayoría de las pretensiones, el despacho establece una culpa del demandante por no tener su contrato de trabajo por escrito, lo que desde el punto de vista jurídico no es posible, ya que el decreto 2090 de 1989 fue creado precisamente para regular las condiciones en las cuales no se fijaron o se fijaron pobremente, o no existe la prueba de la relación exacta al momento de la contratación de unos servicios profesionales de arquitecto; si la ley estableciera que todas las relaciones entre profesionales de la arquitectura se deben tener por escrito, pues ese decreto no existiría y no se habría regulado normativamente.

(ii) Se dice que existió un gran lapso de tiempo en el que el demandante no exigió el pago de sus honorarios, lo que no es cierto; si se verifican las fechas en las cuales se realizó la actividad, no pasó tanto tiempo: a f. 273 del expediente digital aparece un correo electrónico del 8 de febrero de 2017, que es plena prueba, no fue discutido por la demandada y allí se establece que el demandante le cobraba los honorarios por los dos trabajos efectuados al demandado y que lo hace por ese medio ya que no se ha vuelto a comunicar y se le está escondiendo. Si se miran las fechas de la licencia, se puede evidenciar que no ha transcurrido un año y medio, que es la mitad de la regla general del término de prescripción. Además, una cosa es la primera licencia de urbanización y después viene una licencia de construcción y existe un término para poder ejecutar las acciones pertinentes para continuar con esa licencia de urbanización.

Y, (iii) Respecto del primer dictamen pericial, comparte lo dicho por el despacho ya que no se puede decir que haya cumplido con todos los cánones de conocimientos técnicos y porcentajes y que evaluara todos los puntos que fueron encomendados, o que tuviera un error al establecer que se hacen unos cálculos sobre una unidad que finalmente no se construyó y se establece con otros metrajes y áreas y tipos de construcción que fue el segundo proyecto de La Tasajera; sin embargo, son coincidentes los dos peritajes; es claro que ante el primero, el demandado presentó oposición y aportó un segundo en el cual se responden, si bien no todas las preguntas efectuadas, sí gran parte de ellas y se valoran los dos proyectos, VEGAS DE SAN JUAN y FONTANAR, analizándolos cada uno por separado, verificando lo actuado y tratando de establecer los honorarios reales por su actividad. A fs. 543 se establecen unos costos directos, utilidad, IVA, entre otros, de \$1`837.000.000, por lo que los honorarios sería el 10% de lo básico, pero dice que faltan unos elementos, que varios de ellos están dentro del plenario, aunque no se sabe que documentos se le entregaron al perito y se cuestiona por qué dicho perito no fue llamado a la audiencia.

Del proyecto VEGAS DE SAN JUAN es ese perito el que establece que los honorarios no pueden ser tan altos sino solamente de 186 millones porque quedó en un estado de anteproyecto, pero el tercer testimonio de la parte demandada señaló que ese proyecto pasó de anteproyecto, pasó la licencia de construcción, se llegó hasta ventas y fracasó en ese estado y por eso su intervención causándose los honorarios. El Juzgado interpreta que para el primer contrato no es válida la respuesta del demandado, pero para el segundo contrato de prestación de servicios sí es válida, cuando frente a los dos contratos, los testimonios fueron coincidentes; ninguno de los testimonios estableció que ellos mismos estuvieran presentes al momento de celebrarse los contratos, es más, los 3 testigos son de oídas, de los cuales uno es hermano del demandado. Solicita se analice que éste testigo, el que podría ser más sospechoso, es quien dice que dada la buena gestión que había tenido con los dos proyectos anteriores y que había conseguido las licencias respectivas, fue que se le dio la posibilidad de participar en ese otro proyecto. Está probado que los honorarios para un proyecto terminado, que era VEGAS DE SAN JUAN, correspondía a 1.242.000.000 y que el testigo que fue el calculista hizo los cálculos para determinar que no fue anteproyecto y que efectivamente salió a la venta al público.

El DEMANDADO: En cuanto a la condena impuesta extraída del dictamen pericial, hay evidencia suficiente a lo largo del expediente, de que esos trabajos no sirvieron para nada ni se utilizaron, ya que estaban provistos de error, es decir, no sirvieron para adelantar el proyecto FONTANAR. Como bien se dijo en la sentencia, existe prueba por profesionales que dicen que mientras no tenga servicios públicos domiciliarios, no va a servir para nada; hay que darle valor al dictamen del Dr. MAURICIO SALVATIERRA en el sentido de que la licencia de urbanismo fue expedida sin haberse obtenido la disponibilidad de servicios públicos que se debe tramitar ante EPM, requisito indispensable para la solicitud de urbanismo. Siendo un trabajo inconcluso no puede decirse que la condena se trate de una contraprestación justa, por lo que se debe absolver al demandado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar, se pronunció el apoderado del **demandado**. Argumenta que el demandante, en vida, presentó demanda con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato comercial de suministro y declarada esa existencia se declare el incumplimiento de ese supuesto contrato por el no pago de los honorarios profesionales los cuales se deben tasar conforme al Decreto 2090 de 1989. La parte que asiste a la audiencia ante la muerte de su padre, en calidad de sucesor procesal, no tiene conocimiento alguno de la relación que pudo existir entre las partes. Las pruebas del proceso no dan cuenta de la existencia de un contrato de suministro. El demandante no cumplió con las obligaciones a su cargo, por el contrario, ante su incumplimiento y mal diseño de las actividades encomendadas, le causaron al demandado daños y perjuicios al tener que abortar los proyectos ante los errores no propios de un profesional de la Arquitectura. Así: en el proyecto Fontanar la sociedad URBANISMO VIABLE al estudiar lo diseñado, hace reparos que debe corregir antes de emprenderse los trabajos de ingeniería. Por su parte el Arquitecto Mauricio Salvatierra, en su dictamen en relación al proyecto Fontanar manifiesta que la licencia fue expedida sin haberse obtenido previamente la disponibilidad de servicios públicos que se deben tramitar ante EPM, requisito indispensable para radicar la solicitud de Urbanismo y al día de hoy la licencia se venció. No obstante, y a ruego del demandante, se le dio al demandado la oportunidad de diseñar un proyecto que pensaba el demandado iniciar y en el cual este aportaría solo el lote, denominado "Vegas de San Juan". Este proyecto jamás arrancó, amen a los reiterados errores cometidos por el demandante.

En el hecho décimo de la demanda el demandante confiesa su remuneración por su labor de Arquitecto proyectista con un apartamento siempre y cuando el proyecto Vegas de San Juan llegara a desarrollarse. Ante el fracaso del proyecto el demandado y sus socios

posteriormente contrataron otros profesionales como ingenieros, calculistas, arquitectos, diseñadores etc., para que diseñaran un nuevo proyecto denominado SAN JUAN DE LA TASAJERA y tramitaron una nueva licencia de construcción. Al no haber cumplido el demandante con las obligaciones encomendadas no puede reclamar. Está demostrado que no hubo entrega de nada, que el demandante se obligó a resultado y no a medio y además no cumplió con lo prometido.

En cuanto a los demás trabajos que menciona el demandante para estructurar un contrato de suministro, como lo es Parcelación Fontanar P.H y que también se abortó por las razones expuestas, y no obstante el demandado le pagó por la gestión de la licencia la suma de \$20´000.000. La Juez no puede aplicar las tarifas del Decreto 2090 de 1989 por cuanto en ellas se señalan unos parámetros para determinar valores de obra **construida**, pero no hay obra construida. Además, el demandante pactó no pago en dinero, sino la entrega de un apartamento de los que se construyeran. Es por ello que el demandando no debió haber sido condenado en suma alguna.

CONSIDERACIONES:

El demandante (fallecido en el curso del proceso, el 14 de octubre de 2018) sostuvo que en su condición de arquitecto realizó prestaciones periódicas durante cuatro años al servicio del demandado, a partir del 28 de febrero de 2013, mediante lo que denominó un contrato de suministro de prestación de servicios profesionales independientes, con el fin de desarrollar proyectos inmobiliarios masivos para su posterior enajenación a terceros.

Y en efecto, es claro que el Arq. SANTAMARÍA PELÁEZ ejecutó diversas y sucesivas asesorías, gestiones y actuaciones en favor del demandado en tareas de parcelación de lotes, urbanismo y construcción de proyectos inmobiliarios destinados a su futura promoción y comercialización. En al menos tres proyectos participó el actor, el

primero de ellos trató de un local comercial ubicado en la Carrera 81 N° 33 AA 2 de la ciudad de Medellín, el cual quedó por fuera de la discusión en tanto se cumplieron las obligaciones recíprocas de las partes. De modo que la diferencia jurídica subsiste solo frente a los proyectos arquitectónicos que fueron denominados PARCELACIÓN FONTANAR P.H. y VEGAS DE SAN JUAN, ambos localizados en el Municipio de Copacabana – Antioquia. Esto por cuanto la jueza ordenó el pago de la suma de \$23.990.000 por las gestiones y labores realizadas en FONTANAR P.H. (o Anteproyecto según el dictamen pericial como luego se precisará), al paso que por el segundo (VEGAS DE SAN JUAN) la a quo absolvió de toda pretensión.

Ahora bien. Auscultando el sentido de las apelaciones, cuyos temas marcan la ruta a seguir en esta segunda instancia, se tiene: (i) el primer cuestionamiento que hace el vocero judicial del demandante, en cuanto que la jueza le imputó al arquitecto no haber celebrado contrato escrito, en realidad no amerita mayor pronunciamiento sino advertir que, de un lado, aunque ciertamente la falladora si hizo tal manifestación, a renglón seguido precisó que tal falencia no significaba que no le asistiera el derecho a reclamar el pago de los honorarios por la labor desempeñada; y de otro lado, porque evidentemente un contrato de los que las partes acordaron, de prestación de servicios profesionales independientes, bien puede ser consensual.

También resulta irrelevante el segundo punto apelado, relativo a la posible demora del actor en reclamar sus derechos contada partir del inicio de la relación, la cual habría tenido una duración de aproximadamente 4 años. A menos que se configure el fenómeno de la prescripción total, que no lo está, además de que la parte opositora no lo plantea en su recurso, la tardanza en dicha reclamación no obsta para que se efectúa la reclamación de un derecho determinado, que no se haya extinguido por cualquier otro medio jurídico.

De tal manera que solo el tercer aspecto motivo de impugnación ataca el núcleo de la decisión que se revisa, pues aspira el accionante a que se ordene el pago de la suma de \$186'407.613, a título de honorarios por los servicios concernidos al proyecto (o también Anteproyecto) Vegas de San Juan. Cifra esta extraída de uno de los dictámenes aportados al plenario

De otro lado, a su turno, el demandado censura incluso la condena por la suma de \$23'990.000 impuesta en primerio instancia, señalando que los trabajos efectuados por el arquitecto en la obra FONTANAR P.H. "*... no sirvieron para nada*", pues estaban provistos de error, y que tratándose de un trabajo inconcluso no puede decirse que la condena corresponda a una contraprestación justa.

Para la Sala es importante, con miras a elucidar lo anterior, establecer si las obligaciones adquiridas por las partes en este caso, dicen relación a una obligación de medio o a una obligación de resultado. Esta división conceptual no tiene fuente legal, sino origen jurisprudencial y doctrinal, en el sentido de que se considera que se está en presencia de una obligación de medio cuando se le exige al contratista o prestador, diligencia, esmero, cuidado y atención en las actividades a cuyo cumplimiento se obligó, pero sin garantizar un resultado exitoso cuando éste no depende exclusivamente de su actuar. Y son obligaciones de resultado, aquellas en que el deudor se compromete a obtener a satisfacción el cometido de su gestión en interés del acreedor.

Lo anterior para significar que, a juicio de la Sala, la labor desplegada por el demandante fue de medio en el primer caso, y de resultado en el segundo evento. Esto por cuanto según las pruebas del proceso, específicamente la prueba testimonial y la pericial, en la construcción de la PARCELACIÓN FONTANAR P. H., no se acredita con claridad que su éxito estuviere atado a un resultado determinado, de tal suerte que el profesional, en principio, tendría derecho a la remuneración que, por las actividades ciertamente ejecutadas, pueda establecerse

pericialmente con base en lo estipulado en el Decreto 2090 de 1989. Diferente a lo acaecido en el desarrollo de VEGAS DE SAN JUAN, supuesto en el cual se convino entre las partes que, si el proyecto salía adelante, es decir, si lograba desarrollarse satisfactoriamente, el pago se haría en especie, esto es, con la dación de una unidad inmobiliaria de las que se estaban construyendo. Vale decir, que el pago estaba sujeto al cumplimiento de un resultado tangible y determinable, como era el éxito del proyecto.

Así se infiere del dicho de los testigos: en primer lugar, NELSON ENRIQUE BARRERO SÁNCHEZ, indicó inicialmente que JUAN CARLOS le pidió el favor de que le revisara el proyecto VEGAS DE SAN JUAN y le diera su opinión personal al respecto, agregando que éste le habría comentado que, si el proyecto adquiría viabilidad, le pagaría al arquitecto con uno o dos apartamentos. Luego manifiesta en su declaración, que él mismo participó en unas dos reuniones con las partes y un hermano del demandado, donde siempre estuvieron claros que si el proyecto salía adelante se iba a pagar con una o dos unidades de vivienda, sin recordar con claridad cuántas en realidad eran.

JOHN JAIRO VÉLEZ MARÍN, hermano del demandado, al respecto manifestó que él estuvo en varias reuniones con el arquitecto SANTAMARÍA y sabe que se pactó que, saliendo el proyecto Vegas de San Juan adelante, se le iba dar un apartamento; y que, en cuanto a FONTANAR, su hermano acordó pagar la suma de \$20.000.000, de los cuales le hizo algunos pagos en efectivo y otros mediante transferencia, pero no puede precisar cuánto dinero efectivamente le canceló.

Y JESÚS RODRIGO MORALES JIMÉNEZ, Ingeniero Civil y calculista, quien fuera encargado de realizar los cálculos estructurales de esa obra, más parco dijo que entendió que el acuerdo era que JUAN CARLOS le pagaría a JOHN JAIRO SANTAMARÍA con unidades inmobiliarias, siempre que el proyecto saliera adelante. Precisó que, en su caso

personal, también el acuerdo con el demandado era que le pagaría con un apartamento

De lo que sí existe mayor claridad, pues los testigos fueron contestes en señalarlo así, es que el proyecto VEGAS DE SAN JUAN no tuvo viabilidad comercial alguna, nunca se alcanzó el punto de equilibrio y fue necesario *abortar* el proyecto, porque en cerca de nueve o diez meses solo se logró la venta de un apartamento, entre 432 unidades ofertadas, debido fundamentalmente a que el proyecto estaba sobre perfilado en relación con la capacidad económica o el estrato social al cual pertenecían los habitantes de la zona o el sector. Se adujo por los testigos que era un proyecto estrato 5 o 6 construido en una zona de estrato 2, lo que degeneró en el fracaso del proyecto, mismo que fue necesario reestructurar en otro totalmente distinto que pasó a denominarse SAN JUAN DE LA TASAJERA, con otros inversionistas, otros constructores, otros arquitectos, etc.

En ese mismo sentido, en el hecho 10º de la demanda el propia accionante admite que los Proyectos no se habrían consolidado al momento de la presentación de la demanda.

Concluyendo: los dos proyectos (o anteproyectos) motivo de controversia entre las partes, deben recibir distinto trato en cuanto a la fijación de los honorarios, pues, en el caso de FONTANAR P.H., no está probado que el pago estuviere sometido al logro de un resultado determinado, por lo que ha de estimarse como una obligación de medio cuya retribución debe corresponderse con las labores efectivamente ejecutadas. En este punto concreto, el demandante no presentó reparo alguno, por lo que no sería dado explorar la posibilidad de reajustar la condena; al paso que el demandado cuestiona la condena por la inutilidad del proyecto, cuando fue él mismo quien presentó el dictamen como prueba de la impugnación del primer peritaje. Además, se aprecia el trabajo realizado, aun de modo parcial o incompleto por parte del demandante, como lo halló el perito SALVATIERRA, caso no el cual no

es determinante que el resultado final no fuere el esperado, o, en los términos del apelante, que no sirviera para nada

De suerte que la Sala acoge los términos del concepto arquitectónico presentado por el demandado como prueba de sus desacuerdos frente al primer peritaje, y al cual la a quo le dio trato de verdadero Peritazgo según auto de 22 de octubre de 2019, incluso con traslado a las partes para lo que estimaran pertinente.

La pericia del arquitecto MAURICIO SALVAIERRA en verdad se observa preciso, sólido, exhaustivo, claro y fundamentado, además de que cumple los requisitos del artículo 226 del CGP. Y la fijación que hizo de dichos honorarios, tuvo en cuenta una rebaja sustancial de los mismos, porque según lo observado en los planos urbanísticos, se dejaron de realizar los siguientes trabajos:

- *Diseño geométrico de vías*
- *Secciones transversales y perfiles de las vías*
- *Plano de localización de la parcelación*
- *Acotamiento de los lotes*
- *Diseño de la Portería*

En cuanto a VEGAS DE SAN JUAN, respecto al cual si sería determinante el resultado exitoso de la obra, al haberse demostrado que el proyecto fue *abortado*, sin construirse, por las razones ya conocidas, no se causaron honorarios por cuanto no se cumplió la condición pactada inter partes.

Finalmente, como efecto de la decisión confirmatoria de primera instancia en lo anotado hasta ahora, se MODIFICARÁ la orden en cuanto al pago de la condena exclusivamente en favor del Sr. DAVID SANTAMARÍA ÁLVAREZ, pues, ante la eventualidad de que existan otros herederos con igual o mejor derecho, la condena debe impartirse en

favor de la masa sucesoral en razón del fallecimiento del acreedor principal.

Sin costas en esta instancia, por cuanto ambas partes resultaron vencidas en sus respectivos recursos.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Medellín el día 06 de diciembre de 2021, pero la MODIFICA en cuanto que la condena debe impartirse en favor de la masa sucesoral por razón del fallecimiento del acreedor principal.

Costas como se dio en la parte motiva.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2f2de00a86b0f8dfc88874bb83dfee6f265c04dd61ecfd696ae0b5fb243dc08c**

Documento generado en 23/03/2023 02:49:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>